

Santiago, trece de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO:

Por sentencia de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT M-339-2023, se acogió la demanda, declarando improcedente el despido de la actora, y condenando a la demandada al pago del recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio y a la devolución del aporte del empleador al seguro individual de cesantía del trabajador, más reajustes e intereses.

La parte demandada recurrió de nulidad en contra de dicho fallo invocando la causal prevista en el artículo 477 - por infracción de ley- y, en subsidio, la contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en la audiencia respectiva, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

CONSIDERANDO:

1°.- Que, fundando la causa principal, la recurrente acusa infracción de los artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728, que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Fundando este motivo de nulidad señala que el hecho de declarar injustificado el despido que tuvo lugar por la causal de necesidades de la empresa no es un impedimento para efectuar el descuento o imputación del artículo 13, inciso segundo, de la Ley N° 19.728, ya que el artículo 52 de la misma norma regula expresamente el escenario en el cual el trabajador solicita la declaración de injustificado, indebido o improcedente de su despido, como, asimismo, los efectos de la sentencia declarativa de despido injustificado, disposición que no solo permite dicho descuento sino que además lo desarrolla acabadamente para dicho supuesto.

Concluye que la sentenciadora incurrió en una errada interpretación del citado artículo 13 y dejó de aplicar el anotado artículo 52 en el caso de autos y que, de no haber incurrido en dichos yerros, habría desestimado la pretensión de restitución o devolución de \$734.503 imputado a la indemnización por años de servicio en el finiquito de contrato de trabajo.

2°.- Que, como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JFNQXUXLFWM

causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha tenido por probados.

3°.- Que el citado artículo 13 de la Ley N° 19.728, estatuye “*Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios...*”, agregando el inciso segundo que “*se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía...*”.

Por su parte, el artículo 52 de la citada ley dispone “*Cuando el trabajador accionare por despido injustificado, indebido o improcedente, en conformidad al artículo 168 del Código del Trabajo, o por despido indirecto, conforme al artículo 171 del mismo Código, podrá disponer del saldo acumulado en su Cuenta Individual por Cesantía, en la forma señalada en el artículo 15, a partir del mes siguiente al de la terminación de los servicios*” y agrega en el inciso 2° “*Si el Tribunal acogiere la pretensión del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al artículo 13*”.

4°.- Que, del tenor de las reglas antes transcritas, se desprende que, para que ella opere, es necesario que el descuento del saldo de la cuenta individual del trabajador por cesantía se haya debido efectivamente a las necesidades de la empresa. Por ende, si el trabajador ha recurrido a la justicia para que se pronuncie sobre la validez de esa causal de término de los servicios, en relación con el recargo legal del 30 % de la indemnización por años de servicios y de la restitución de esos fondos descontados en el finiquito, los efectos que se derivan de aquella pretensión quedan en suspenso hasta la decisión jurisdiccional.

Ahora bien, si el juez determina que no se ha probado debidamente las necesidades de la empresa para despedir al trabajador y declara que el despido de este es improcedente -como ocurre en la especie- no puede tener lugar la imputación referida en el inciso segundo de la norma precitada, ya que esa deducción está sujeta a la condición de haber operado efectivamente la causal de necesidades de la empresa.



5°.- Que, este predicamento, por lo demás, se refuerza en el inciso segundo del artículo 52, toda vez que al acogerse la demanda del trabajador, declarando el despido improcedente, dicha disposición establece que el tribunal *“deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que corresponden conforme al artículo 13”*, referencia que debe entenderse hecha al inciso primero de este último precepto, pues el pretendido descuento obviamente no es el pago de las prestaciones, sino una merma de las mismas.

Por último, admitir lo contrario también significaría que la decisión jurisdiccional en cuanto declara injustificado o improcedente el despido carece de eficacia, lo que es un evidente contrasentido, ya que al no haber operado la causal invocada por el empleador para despedir al trabajador, los efectos que pudiera haber generado ese término de servicios deben retrotraerse a su estado anterior, razón por lo que es del todo procedente restituir el dinero que se ha descontado indebidamente al trabajador.

6°.- Que, en tal virtud, al razonar la sentencia que procede la devolución del aporte del empleador a la AFC, no ha incurrido en infracción de ley, pues ha dado correcta aplicación a los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.728, lo que desencadena que la causal de infracción de ley, en su modalidad de falsa aplicación de la norma, no puede prosperar.

7°. - Que, en subsidio, la recurrente invocó la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por haberse pronunciado el fallo con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Expone que la empresa, que se dedica a la comercialización de comida rápida, ha enfrentado una serie de dificultades económicas significativas durante los últimos años, particularmente debido al estallido social, la pandemia y la inflación generalizada. El impacto combinado de estos elementos ha creado un escenario económico extremadamente complejo que culminó en el despido de la demandante bajo la causal de necesidades de la empresa.

Agrega que el punto central del juicio recaía en la efectividad de los hechos contenidos en la carta de despido, documento que fundó adecuadamente la causal invocada, describiendo claramente las condiciones



adversas del mercado, la inestabilidad económica, los problemas de abastecimiento de insumos y el incremento desmesurado de los costos operacionales, todos factores persistentes y ajenos al control de la empresa, afectando gravemente su viabilidad financiera.

Observa que, para sustentar su posición, esa parte presentó abundante prueba documental, incluyendo balances anuales de 2021 y 2022 que demuestran que su pasivo alcanzó los \$17.177.779.632, con pérdidas de \$10.539.049.563, frente a una ganancia anual de solo \$1.806.735.803, acreditando también el aumento sostenido en costos de arriendo, mantención de locales, insumos básicos, remuneraciones y diversas deudas externas, todo lo cual provocó el cierre de más de seis locales, incluyendo aquel donde trabajaba la demandante, cuyo contrato de arriendo finalizó el mismo día de su despido, hechos que fueron refrendados por la prueba testimonial y numerosos finiquitos y cartas de despido que evidenciaban las necesidades de reestructuración de la empresa, particularmente agudizadas a finales de 2023, período en que fue desvinculada la demandante.

Añade que, como consecuencia directa de estos factores económicos adversos, la empresa solicitó acogerse a un proceso de reorganización judicial en causa que se tramita ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, bajo el ROL C-17916-2023, días después del despido de la demandante, ocurrido el 31 de octubre de 2023, hecho público y notorio que también fue cubierto por la prensa, según se acreditó.

En ese contexto, refuta la conclusión del tribunal respecto a que el despido se basó en hechos vagos e imprecisos, pues se citaron todas las circunstancias de hecho antes expuestas, respecto de las cuales se rindió abundante prueba.

Argumenta que, además, se trata de factores objetivos que constan en los propios registros económicos de balance de la empresa y de tal gravedad que tienen a la empresa al borde de la insolvencia.

Indica que la propia demandante, al absolver posiciones, reconoció que rara vez se lograba cumplir con el presupuesto del local donde trabajaba como gerente, y que estaba al tanto del precario estado financiero de la empresa, por lo que los criterios utilizados para el despido fueron objetivos, ajenos a la voluntad de la empresa, con efectos perniciosos permanentes que



hicieron económica y financieramente inviable mantener todos los puestos de trabajo, obligando a cerrar locales, reducir personal y, finalmente, solicitar la reorganización judicial.

Plantea que la empresa implementó diversas medidas para evitar desvincular trabajadores y no caer en insolvencia, incluyendo suspensiones laborales, reestructuración financiera y adquisición de deudas, situaciones que fueron experimentadas directamente por la demandante pero que no fueron consideradas adecuadamente por la sentenciadora.

Cuestiona el razonamiento lógico del fallo, que omitió analizar si los hechos eran graves u objetivos por estimar que aquello era imposible dada la vaguedad de la carta, fundamento que estima insuficiente para establecer que no se configuraron las necesidades de la empresa, pues bajo tal criterio para poder acreditar dicha causal sería menester que cayera en insolvencia declarada.

Sostiene que la magistratura ignoró el carácter objetivo y grave de los hechos del despido, no analizó adecuadamente la relación de causalidad directa entre los hechos, su objetividad y su gravedad, circunstancias que fueron evidentes incluso para la propia demandante.

Afirma que cumplió cabalmente con los requisitos legales para invocar las necesidades de la empresa como causal de despido, al tratarse de circunstancias de carácter económico, objetivas, ajenas a la voluntad de las partes y de repercusión permanente.

Concluye que la sentenciadora no analizó adecuadamente la gravedad de su situación financiera, omisión que, contrastada con la prueba presentada y el escueto contenido del fallo, constituye un vicio insalvable en la sentencia, cuyos razonamientos se alejan del principio de razón suficiente.

8°.- Que la viabilidad de esta causal colisiona con la naturaleza del procedimiento incoado en autos y la previsión que al respecto impone el propio legislador. En efecto, la acción que dedujo el actor ha sido tramitada conforme al procedimiento monitorio, respecto del cual el artículo 501 del Estatuto Laboral, expresa en sus incisos 3° y 4° lo siguiente *“El juez deberá dictar sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459.*

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, siempre que se trate



de causas de interés colectivo o causas que presenten mayor complejidad, el juez podrá, mediante resolución fundada, dictar la sentencia respectiva hasta en un plazo de tres días de terminada la audiencia, la que deberá notificarse en la forma prevista en el inciso primero del artículo 457”.

9°.- Que como resulta evidente, la regla especial del artículo 459, que se contiene en el artículo 501 y que habilita para prescindir, entre otra, de la exigencia del numeral 4° de la primera norma citada [*El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación*], de manera que no puede aquella incurrir en la causal de nulidad que se denuncia, sí por disposición legislativa el fallo no debe cumplir el requisito que se echa en falta.

En consecuencia, si la sentencia que se pronuncia en este tipo de procedimiento –monitorio–, puede prescindir por disponerlo en este sentido el legislador, del razonamiento referido a la ponderación de la prueba, mal se podría sustentar un recurso de nulidad basado en una errónea ponderación de ella por transgresión a la sana crítica, razón suficiente para desestimar el presente arbitrio de nulidad en todos sus extremos.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 477, 478 letras b), 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza sin costas** el recurso de nulidad deducido por la demandada en contra de la sentencia de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT M-339-2023, sentencia que, en consecuencia, **no es nula**.

Acordado con el voto en contra de la ministra Leyton Varela, quien estuvo por entrar al fondo del recurso, pues es posible concluir que, procesalmente, cabía intentar el motivo de nulidad de la letra b) del artículo 478, en atención al hecho cierto de que el propio juez de base entendió que debía ceñir su fallo a las exigencias íntegras del artículo 459, en tanto realizó el examen de la prueba y arribó a las conclusiones fácticas que la misma contempla, lo que permitía, entonces, enjuiciar el razonamiento probatorio de la decisión y la correcta emisión del mismo.

Regístrese y comuníquese.

Laboral-Cobranza N° 1527-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JFNQXUXLFWM



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JFNQXUXLFWM

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Lilian A. Leyton V. y Abogada Integrante Soledad Krause M. Santiago, trece de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a trece de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JFNQXUXLFWM